



Movimientos socio-ambientales en América latina y Europa: convergencia de las luchas e intercambios de experiencias

Taller / Mesa de debate organizado por France Amérique Latine (FAL) en el Foro Social Mundial de Belém, el 29 de enero 2009

1. Conflictos socio-ambientales en América latina y Europa: algunos elementos de análisis.....	1
2. Intercambio de experiencias a partir de ejemplos concretos.....	4
2.1. La oposición al TAV en Euskal Herria (País Vasco) : por un modelo de transporte sustentable y democrático	4
2.2. Los Segadores Voluntarios en Francia: el derecho de desobedecer en nombre del principio de precaución.	5
2.1. Intag, Ecuador: « Mina no, vida si ».....	6
2.4. Amazonia: los pueblos indígenas defienden sus derechos	7
3. Reflexiones sobre las estrategias de lucha.....	8
3.1. Resistencia y creación (vídeo).....	8
3.2. Debate y conclusiones	9

* * *

Este taller está dedicado a los movimientos socio-ambientales que en América latina como en Europa rechazan el saqueo de las riquezas de sus territorios, luchan contra la destrucción de los equilibrios naturales y elaboran alternativas para un desarrollo diferente. Su objetivo es facilitar el intercambio de experiencias y reflexionar juntos sobre las diferentes estrategias de lucha y medios de acción.

1. Conflictos socio-ambientales en América latina y Europa: algunos elementos de análisis

Anna Bednik,

Francia América latina / Aldeah, Francia

En América latina, la especialización en la producción de materias primas (minerales y productos agrícolas) es ante todo un legado de la época colonial. La explotación a gran escala de los recursos naturales nacionales formará además la base de las políticas de desarrollo implementadas después de la independencia. Sin embargo, serán sobre todo la crisis de la deuda (1980-1990) y su gestión por las instituciones financieras internacionales (políticas de ajuste estructural y liberalizaciones) las que condenarán a la mayoría de los países de la región a **la exportación de materias primas como único modelo de desarrollo**. La suma importancia atribuida a las cuestiones relativas a la seguridad de las inversiones (de las empresas extranjeras) y de los abastecimientos (en materias primas) en las negociaciones llevadas a cabo primero en el marco de la OMC y luego en los tratados bilaterales de libre comercio (con los Estados Unidos y la UE) no hace sino reforzar esta coyuntura.

Esto conlleva una **proliferación de proyectos de explotación industrial de recursos naturales** (que se intensifica a partir de los años 1980-90): explotaciones forestales, mineras, petroleras, grandes obras de infraestructura (presas, rutas, oleoductos) cuyo objetivo es facilitar el transporte de los recursos naturales extraídos, etc., **realizadas a menudo sin consideración alguna de los ecosistemas y las poblaciones locales**, provocando a veces auténticas catástrofes ecológicas y humanas.

El carácter de « prioridad nacional » frecuentemente atribuido a estos proyectos, hace que las zonas naturales



protegidas, así como el reconocimiento estatal oficial de los territorios indígenas, ya no aseguran una real protección. El “interés de la Nación” está por encima de las leyes vigentes.

Los intereses de las poblaciones locales pocas veces son tomados en consideración y a pesar de que numerosos textos de leyes internacionales y de que la mayoría de las legislaciones nacionales reconocen el derecho a la consulta y al “consentimiento previo, libre e informado”, estas leyes a menudo no son aplicadas o lo son solo por el cumplimiento de “formalidades” (inclusive la obtención de firmas por vía de corrupción y/o bajo amenaza). Pocas veces se implica a las comunidades para la elaboración de los estudios de impacto socio-ambiental, y sólo se las solicita para aprobar los resultados, a menudo sin que puedan comprender su significado (vocabulario técnico).

Estos diferentes factores hacen que se repita el esquema siguiente: el Estado otorga la concesión de un territorio rico en recursos naturales a empresas privadas sin que las poblaciones locales hayan sido consultadas ni indemnizadas. Las empresas se apropian de los territorios y de los recursos naturales vitales, imponiendo sus condiciones a las poblaciones que dependen de ellos. Esto provoca numerosos **conflictos** entre las poblaciones locales, las empresas y los Estados. En estos conflictos, se constata la **generalización del uso de la fuerza** (fuerzas del orden público, grupos paramilitares financiados por las empresas) y la **aplicación de las leyes antiterroristas** contra los militantes.

En Europa, el neoliberalismo avanza tanto a través de las políticas nacionales (desmantelamiento de los sistemas sociales existentes, retroceso en materia de los derechos y garantías sociales...) como a través de la reglamentación europea que promueve la liberalización de los mercados y la privatización de las empresas públicas (entre las cuales están las que proveen el acceso a los recursos naturales), consideradas como actores de la competencia desleal.

La **nueva estrategia económica y comercial de la Unión europea**, formalizada en un documento llamado “*Global Europe - competing in the world*” (2006), prevé avanzar mucho más en la supresión de las barreras - arancelarias, pero también reglamentarias, especialmente en materia de salud e inversiones extranjeras. A partir de entonces, con esta desregulación se busca no sólo facilitar el acceso a los mercados extranjeros para las mercancías y los capitales europeos, sino también provocar una mayor apertura del mercado europeo a los capitales y productos extranjeros. Lo que conlleva una mayor vulnerabilidad de los sectores como la agricultura frente a las fluctuaciones de los mercados mundiales.

Aunque los contextos en Europa y en América latina son diferentes (con las luchas ecologistas en Europa se ha logrado una mayor protección de la naturaleza, conjuntamente a una deslocalización de las actividades contaminantes hacia los países del Sur), **los conflictos socio-ambientales existen también en Europa**. Los conflictos locales, nacionales o europeos estallan a raíz de proyectos de infraestructuras, de la legalización de los cultivos transgénicos, de la industrialización de la agricultura, de opciones en materia de gestión de los recursos naturales, etc. Estos conflictos se desarrollan en un contexto en el que impera la hipocresía: el discurso oficial a favor del “desarrollo sustentable”, de la responsabilidad de las empresas, de la protección del medio ambiente y de la lucha contra el cambio climático, etc., y por otro lado las decisiones políticas contrarias a estos valores y objetivos, así como la recuperación de estos a manos de los “negocios verdes” y el predominio de la lógica de la ganancia y de los intereses privados.

Algunas generalidades:

Los conflictos socio-ambientales pueden relacionarse:



- Con la **extracción de materias primas y energía** (las explotaciones mineras, petroleras y gasíferas, la agroindustria, las explotaciones forestales, la apropiación de los recursos biológicos, el agua (grandes presas hidroeléctricas, proyectos industriales de irrigación, la apropiación y la contaminación de las reservas de agua), la pesca industrial, la producción de energía, etc.),
- Con **los proyectos de infraestructuras y de transporte** (construcción de oleoductos y gasoductos, ampliación de puertos y aeropuertos, proyectos de autopistas, etc.),
- Con **los residuos de producción** (durante la producción y posteriores a esta),
- etc.

Las principales **causas** de estos conflictos son: **la desigualdad en el acceso y en el uso de los recursos naturales y de los servicios que aportan** (competencia asimétrica en el uso de los territorios y de los recursos entre las empresas y los Estados por un lado y éstas y las poblaciones locales por el otro) y las **consecuencias nefastas para el medio ambiente y para las personas** de la explotación industrial de estos recursos, o, de manera general, la “**distribución ecológicamente desigual**” (tanto de los beneficios como de los perjuicios).

¿Qué está realmente en juego en estos conflictos?

Los recursos naturales son vitales:

La vida de centenares de millones de habitantes de nuestro planeta (campesinos, pueblos autóctonos, pescadores, etc.) depende directamente de los recursos naturales disponibles así como de su calidad y durabilidad (campos, bosques, ríos, mar, biodiversidad...). Para ellos, la defensa de su ambiente inmediato es una **lucha por la supervivencia**. En ecología política, se habla del “**ecologismo popular**” (o del ecologismo de los pobres), un concepto que se opone a la tendencia que consiste en considerar a los pobres como los principales agentes de la degradación del medio ambiente y a la protección del medio ambiente, como un tema reservado a expertos y científicos.

Modos de vida, tradiciones y culturas:

La explotación industrial de los recursos naturales y la visión del mundo y de la sociedad que esta explotación encarna (productividad, intercambios mercantiles) transforman las formas tradicionales de organización social. La colonización de los territorios por las empresas compromete no sólo los equilibrios ecológicos frágiles, sino también la supervivencia de las culturas, valores, estilos de vida y tradiciones de los pueblos indígenas, revelando un desacuerdo profundo sobre el valor y la significación que los recursos naturales tienen para unos y otros.

Autodeterminación – territorio:

Existe un punto de convergencia en las reivindicaciones de todos los movimientos socio-ambientales: poder decidir sobre el futuro de su territorio, y así ser actores de su propio porvenir.

Modelos de desarrollo:

En primer lugar, el objetivo del “desarrollo” sirve para justificar la realización de proyectos de extracción de recursos: el **desarrollo nacional** (los recursos naturales son propiedad de la Nación y deben servir para su desarrollo / para luchar contra la pobreza) y el **desarrollo local** (creación de empleos y de actividad económica). Sin discutir en profundidad la realidad de estas promesas, he aquí algunas preguntas que podríamos hacernos: ¿Cómo explicar la persistencia de la pobreza en las zonas en las que se generan las principales riquezas de muchos países? ¿Es el “desarrollo” propuesto por las industrias extractivas y los proyectos de explotación de los recursos naturales realmente sustentable? ¿Cómo planificar a largo plazo cuando la actividad productiva se somete a las exigencias del mercado y debe ir adaptándose incesantemente a estas exigencias? Rechazando esta visión de desarrollo, muchos movimientos van implementando **proyectos alternativos** a nivel local: formas de



producción diversificada en busca de autosuficiencia alimentaria, utilización del potencial productivo de los ecosistemas sin destruirlos, control democrático y comunitario del uso de los recursos naturales, etc.

Desde la era de las liberalizaciones en América Latina y el endurecimiento del modelo neoliberal en Europa, la importancia de los conflictos socio-ambientales es cada vez mayor. Los contextos son muy diversos, pero estos conflictos se caracterizan en todas partes por una gran **asimetría**: por un lado, el poder público y las empresas (con medios financieros consecuentes y encarnando ante la opinión pública el “desarrollo” del país), y por otro lado, las comunidades rurales y/o activistas de organizaciones locales (con falta de medios, dificultad de acceso a la información y a los mecanismos legales). Ante esta difícil situación, **¿de qué herramientas disponen los movimientos socio-ambientales?**

2. Intercambio de experiencias a partir de ejemplos concretos

2.1. La oposición al TAV en Euskal Herria (País Vasco) : por un modelo de transporte sustentable y democrático

Carlos Alonso e Iñaki Barcena Hinojal,

Ekologistak Martxan (Ecologistas en Acción) et AHT gelditu ! Elkarlana, Euskal Herria (País Vasco), Estado Español

Presentación adjunta

« El proyecto del TAV es la principal amenaza para el medio ambiente de la región Euskal Herria » explica Carlos Alonso, « sus impactos sociales, económicos y territoriales son igualmente inaceptables ». Este proyecto gigantesco (560 kilómetros de líneas de alta velocidad) debe reunir las capitales vascas y las redes europeas, sin favorecer a las pequeñas y medianas municipalidades por las cuales pasará. Sin embargo, son estas municipalidades, así como las áreas rurales que se encuentran junto al trazado, que pagarán las consecuencias : desplazamiento de grandes cantidades de tierra durante la construcción de las vías y de los túneles, destrucción de las tierras agrícolas y forestales, impactos para el paisaje y los espacios naturales, explotación acelerada de las canteras existentes y aberturas de nuevas canteras para abastecer el hormigón necesario a las obras, consecuencias graves para los sistemas hídricos subterráneos y los ecosistemas fluviales, ruido ambiental... La inversión para el proyecto del TAV se estima a 4,2 mil millones de euros y podría alcanzar 6 mil millones, equivalente a 54 años de presupuesto del Ministerio vasco del medio ambiente! Paralelamente, se descuidan las redes ferroviarias de las municipalidades de la región.

Ante la ausencia de información pública y la falta de respeto para las instituciones municipales y las poblaciones afectadas, el movimiento ecologista vasco, del cual forma parte la Ekologistak Martxan (confederación de asociaciones ecologistas), se moviliza para denunciar estos hechos y defender un modelo de transporte duradero y democrático, que cohesione la sociedad y el territorio. Primero se trató de reagrupar a la sociedad civil - sindicatos, movimientos sociales y grupos ecologistas, partidos políticos, personas afectadas por el proyecto - y a las autoridades locales dentro de la AHT gelditu ! Elkarlana, plataforma social creada en 2001 para coordinar la oposición al proyecto del TAV. Su resistencia pasará por acciones « públicas, directas y no violentas ». Un primer objetivo: informar. Juntos, AHT gelditu ! y Ekologistak Martxan van a realizar grandes campañas de concientización sobre los impactos del proyecto. Denuncian el proyecto ante las instituciones, exigiendo la interrupción de las obras y la apertura de un amplio proceso de información, debate y participación social. El movimiento también organiza votaciones populares y, ante el no reconocimiento de los resultados de éstas, multiplica acciones de « desobediencia civil pacífica »: manifestaciones en las cercanías de las obras, sentadas en las plataformas, ocupación simbólica de las oficinas, etc.



Por estas acciones, las fuerzas del orden público reprimen con violencia a los miembros del movimiento, y, con el pretexto de sus supuestos vínculos con ETA, la legislación antiterrorista es aplicada contra ellos. Los ecologistas, que se oponen a toda acción violenta y armada, denuncian la criminalización del movimiento y su sistemática represión “mediática, policial y judicial”.

Más información: www.ekologistakmartxan.org, www.ahtgelditu.org

2.2 Los Segadores Voluntarios en Francia: el derecho de desobedecer en nombre del principio de precaución.

Francine Bavay y Guillaume de Crop,
Los Segadores Voluntarios, Francia

Presentación adjunta

Guillaume de Crop et Francine Bavay hablaron de los inicios de los *Segadores Voluntarios* y contaron cómo el movimiento pasó de una movilización de algunos individuos en 2003 a 7500 personas en la actualidad, militantes de la sociedad civil y representantes de poder público. Los *Segadores Voluntarios* se oponen al uso de transgénicos (*OGM: Organismos Genéticamente Modificados*) en la agricultura y a los patentes del ser vivo artificial. Defienden el derecho a un medio ambiente sano y denuncian los cultivos de plantas transgénicas en campo abierto invocando el principio de precaución. No se oponen al uso de transgénicos en el marco de la investigación científica, pero sí a que las experimentaciones se desarrollen en el campo, al aire libre, lo que podría resultar en la contaminación de parcelas aledañas. Exigen transparencia en la información, y sobre todo, que los estudios realizados sobre cultivos transgénicos sean divulgados al público.

Su forma de acción ha sido la desobediencia « *cívica* » por medio de movilizaciones ciudadanas no violentas consistentes en la destrucción de parcelas de ensayo de cultivos transgénicos en campo abierto y de los cultivos transgénicos comerciales. Hicieron llegar sus protestas a políticos, y algunos de éstos se unieron al movimiento. Francine Bavay pudo dar testimonio de su acción y explicar las razones por las cuales quiso formar parte del movimiento, participando en segas y presentando su tarjeta de visita de representante política (vicepresidenta de la región Ile de France) a la guardia civil. La desobediencia civil (o « *cívica* », como la designan los *Segadores Voluntarios*) implica tomar decisiones ilegales en un momento dado, y es importante implicar a las instituciones en este proceso.

Por sus acciones, los *Segadores* fueron demandados y condenados, y las multas que los diferentes miembros del movimiento deben hoy al Estado alcanzan casi 1,5 millones de euros. A partir de 2008, « el delito de sega » se sanciona con dos años de cárcel y 75000 euros de multa. Sin embargo, se constatan ciertos avances, ya que a principios de 2008 el gobierno ha decidido activar una cláusula de salvaguarda¹ e ha iniciado el proceso de suspensión del cultivo comercial de maíz transgénico Mon 810. De las cinco multinacionales que hacían experimentaciones de cultivos transgénicos en Francia a principio de los años 1990, en la actualidad, Monsanto es la única que sigue experimentando.

Más informaciones: www.monde-solidaire.org

¹ La « cláusula de salvaguarda » permite prohibir provisionalmente el cultivo o la comercialización de un organismo genéticamente modificado, invocando un riesgo en materia de salud y de medio ambiente



2.1. Intag, Ecuador: « Mina no, vida si »

Silvia Quilumbago,

Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), Ecuador

Presentación adjunta

Silvia Quilumbango, presidenta de la organización ecologista ecuatoriana DECOIN, nos explica como los habitantes de la zona de Intag (cantón Cotacachi, noroeste del Ecuador), se movilizaron para poner fin al proyecto de explotación de cobre en la región.

Liderado primero por una empresa japonesa (Bishi Metals, subsidiaria de Mitsubishi) y luego por una compañía canadiense (Ascendant Copper), este proyecto de mina a tajo abierto conllevaba graves consecuencias para el medio ambiente de la región, reserva de biodiversidad única en el mundo (contaminación de aguas y suelos, deforestación y riesgo de desertificación, extinción de especies endémicas...) y para las comunidades campesinas locales (“reubicación” de centenas de familias para dejar sitio a la futura mina, imposibilidad de producción agrícola en las cercanías de las concesiones...a cambio de la creación de algunos empleos temporales)². Las concesiones mineras fueron otorgadas sin consultar a la población local.

Después de haber multiplicado las protestas, que fueron desatendidas, en 1997, los habitantes de Intag, en su mayoría opuestos al proyecto minero, desmantelan el campamiento de exploración. Ante la amplitud de la movilización, los japoneses se retiran, y los chilenos (CODELCO), interesados por el cobre de la región, suspenden las tramitaciones. Sin embargo, una modificación de la ley minera (1999)³ permite al gobierno volver a vender las concesiones, que se encuentran, en 2003, en manos de una empresa canadiense “junior” Ascendant Copper Corporation.

Ascendant Copper permanecerá en la región durante cuatro años. Después de haber hecho una serie de promesas de desarrollo local para que las comunidades aceptasen el proyecto de la mina, la empresa y sus subcontratistas multiplican las amenazas de muerte y las agresiones contra sus opositores. Dividen a las comunidades buscando su apoyo por medio de prácticas clientelistas y corruptas (“la compra de conciencias”) e intentan desestabilizar al gobierno cantonal que respalda la lucha de los habitantes.

El movimiento de resistencia se moviliza nuevamente: los campesinos y ecologistas interpelan a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, inician acciones judiciales y, en 2005 destruyen el campamento de la empresa. En diciembre 2006 los campesinos secuestran a 57 paramilitares empleados por la empresa. Cinco días después, los rehenes serán entregados a la policía⁴, pero las pruebas irrefutables recogidas gracias a los interrogatorios filmados hacen que se decida una primera suspensión de las operaciones de Ascendant. Sin embargo, la compañía no se retira de la zona y tras nuevos incidentes, el gobierno actual de Rafael

² Estas consecuencias fueron explicitadas en el estudio de impacto socio-ambiental conducido por la Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional (JICA). Los primeros efectos (contaminación del río, enfermedades de la piel...) fueron constatados por los habitantes al iniciar la exploración (mitad de los años 90).

³ La modificación de la ley interviene en el marco del proyecto de « desarrollo minero y de control ambiental » financiado por un préstamo del Banco Mundial y las donaciones extranjeras, que buscaba facilitar la instalación de multinacionales.

⁴ La liberación de los rehenes se negoció a cambio de la visita de un representante del Ministerio de Energía y Minas, el rechazo del Estudio de Impacto ambiental por el Ministerio y la retirada de la zona de la compañía canadiense.



Correa reitera la suspensión en octubre de 2007. Por fin, en enero de 2008, en el ámbito de una revisión nacional de los permisos mineros, las concesiones de Ascendant son revocadas y revertidas al Estado. Sin embargo, las organizaciones ecologistas de la región, entre las cuales la Decoin, siguen movilizándose exigiendo que el gobierno abandone todos los proyectos de explotación minera a gran y mediana escala a nivel nacional.

Finalmente, Silvia nos presenta las distintas alternativas a la minería que han surgido en Intag durante estos años de resistencia: ecoturismo solidario, agroecología y comercio justo de productos agrícolas y artesanales locales, reservas forestales e hídricas comunitarias, producción de energías renovables, etc. En 2002, una ordenanza del gobierno cantonal proclama el cantón Cotacachi « Cantón ecológico », consolidando la opción por un modelo de desarrollo socialmente justo y respetuoso del medio ambiente, por el que luchan las comunidades de Intag.

Para mayores informes: www.decoin.org

2.4. Amazonia: los pueblos indígenas defienden sus derechos

Jorge Gabriel Furagaro, OPIAC (*Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, Colombia*) y **Valentín Muiba** (*Bolivia*), *Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Cuenca Amazónica*

La COICA⁵ trabaja para concientizar y movilizar la sociedad civil, alertándola sobre las políticas y los proyectos que podrían tener consecuencias nefastas para los pueblos indígenas de la Amazonia y en su medio ambiente. « *En la Amazonia, el hecho de tener petróleo, minerales y agua es fuente de problemas. Tenemos demasiados recursos naturales que interesan a las empresas multinacionales* », explica Jorge Gabriel Furagaro, presidente de la OPIAC, organización miembro de la COICA.

Hoy en día, la región amazónica debe enfrentarse con una amenaza sin precedentes: la IIRSA, Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur, un gigantesco programa que abarca 507 proyectos de construcción de infraestructuras – carreteras, puentes, vías fluviales, conexiones energéticas y de comunicación - concentradas en su mayoría en las zonas tropicales y andinas.

Junto con otras organizaciones indígenas de Abya Yala (América), la COICA lanza una gran campaña de sensibilización y movilización contra la IIRSA. Para las organizaciones indígenas, estos proyectos no ayudan a las poblaciones locales ni a su producción comunitaria, sino que refuerzan el rol de proveedores de materias primas de los países suramericanos, solo benefician a las grandes industrias internacionales y convierten a sus regiones en zonas de tránsito de mercancías, dañando los territorios indígenas y acelerando la destrucción del ecosistema amazónico.

Las organizaciones exigen transparencia y respeto del derecho a la consulta, así como que se tomen en consideración las formas de “desarrollo” propias de los pueblos indígenas, y el principio del “Buen Vivir” en que se basan, como alternativas legítimas al modelo occidental.

Valentín Muiba nos explica que para luchar contra la IIRSA, las organizaciones de la COICA apelan a los organismos internacionales, especialmente al Alto Comisionado en Derechos Humanos de las Naciones Unidas exigiendo una investigación urgente sobre los impactos de la IIRSA; interrogan a las instituciones financieras⁶

⁵La COICA es la instancia de coordinación de nueve organizaciones indígenas provenientes de nueve países de la cuenca amazónica.

⁶ Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fonplata, Banco Europeo de Inversiones, Corporación Andina de Fomento



sobre las razones de su implicación en los proyectos de la IIRSA y a las instancias jurídicas nacionales e internacionales⁷; también interpelan a los gobiernos progresistas del continente exigiendo la revisión del proyecto.

Además, las organizaciones de la COICA se movilizan en sus varios países miembros. Jorge Gabriel Furagaronos habla de Colombia, donde su organización lucha contra las fumigaciones aéreas de los cultivos ilícitos, muy peligrosas para el medio ambiente y la salud, realizadas sin que los habitantes de las zonas fumigadas sean consultados. Las movilizaciones de organizaciones indígenas han resultando en la creación de una « mesa regional amazónica » cuyo objetivo es propiciar el diálogo con el gobierno.

Para mayores informes: www.coica.org

3. Reflexiones sobre las estrategias de lucha

3.1. Resistencia y creación (vídeo)

Miguel Benasayag, filósofo, ex militante del PRT-ERP (partido y guerrilla guevarista en Argentina), Argentina/Francia

Ponencia en video: www.aldeah.org/es/benasayag-fsm-2009-belem-para-amazonie-bresil-resistencia-creacion

Resumen de las ideas principales:

Los “movimientos de un nuevo tipo” nacieron hace más o menos 25 años, en el momento en que el paradigma “clásico” de lucha social y de cambio social (hacer la revolución y tomar el poder para después cambiar todo) se rompe. Hay algo que desaparece como posibilidad y comienza lo que conocemos hoy como el triunfo mundial del neoliberalismo y del capitalismo. En ese momento van a emerger dos tipos de movimientos: el movimiento de derechos humanos y los movimientos de “nuevo tipo”, especialmente los movimientos relacionados con la ecología. Estos movimientos van a formular dos hipótesis fundamentales:

- Las luchas ya no pueden ser luchas unificadas en una causa común, la « contradicción principal » (capitalismo/proletariado o imperio/colonias), sino que hay una multiplicidad de luchas. Estas luchas no están todas vinculadas a un momento de ruptura general y cada una tiene su legitimidad y sus “tiempos”. Es la hipótesis teórica y práctica de que es la multiplicidad, con tiempos diferentes, la única vía de emancipación.
- La antigua hipótesis marxista clásica – es necesario producir en cantidad para crear las condiciones materiales de una posible redistribución – se enfrenta con una limitación ecológica objetiva: la imposibilidad de un desarrollo ilimitado de la producción industrial. En consecuencia, el « desarrollismo », fundamento de todo programa progresista en el continente latinoamericano, plantea un problema mayor. La justicia social ya no puede ser concebida bajo la condición del desarrollo exponencial de las fuerzas productivas que hagan que todo el mundo pueda tener acceso a los bienes de consumo. La limitación ecológica exige un cambio muy profundo y muy lento, que no se puede decidir desde « arriba »: se trata de un cambio en la manera de desear de la gente. Es imposible seguir deseando que todo el mundo tenga lo que solamente una parte del mundo tiene hoy en día, tanto como el esquema capitalista de consumo ilimitado es imposible.

Hoy en día, la justicia social y distributiva no puede concebirse aisladamente, sin articularse con la justicia

⁷ Exigen el establecimiento de actos pre-cautelatorios que suspendan los proyectos IIRSA en defensa de los derechos constitucionales y de tratados como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos autóctonos



ecológica. Por esta razón, el Hombre – la especie humana, la civilización del Hombre – necesita forzosamente pensar y relacionarse de una manera diferente con el medio ambiente. Para poder pensar en términos de la “justicia de la vida” (justicia social y justicia ambiental, o como lo dice el subcomandante Marcos “contra el neoliberalismo, la vida” – formula poética que de hecho nos revela la realidad), hay que volver a ubicar al Hombre en un todo. Quizás nuestros hermanos indoamericanos que han guardado su cosmogonía pueden explicárnoslo más claramente.

Este nuevo desafío, el de reflexionar en términos de ecosistemas, se manifiesta en ejemplos concretos. Uno de dichos ejemplos es el que opone una parte de la población uruguaya a la argentina a propósito de la papelería de Pando, instalada por una empresa finlandesa en el lado uruguayo de la frontera. Algunos uruguayos ven en este proyecto la posibilidad de un desarrollo industrial, desde el punto de vista tradicional– empleo, consumo, mejores condiciones de vida. Sin embargo, otros uruguayos consideran que se trata de un serio problema ecológico: la contaminación provocada por la actividad de la empresa se extenderá por toda la región del litoral y a medio plazo, producirá graves consecuencias en materia de salud y medio ambiente. Del otro lado de la frontera, los argentinos sólo sufren las consecuencias nefastas de la contaminación, sin beneficio alguno.

Este enfrentamiento, deplorable ya que ha originado conflictos en la población, es un ejemplo arquetípico de la actual complejidad de la justicia y de la lucha. Hasta hace poco, el imaginario del desarrollo era “donde hay fábrica hay prosperidad”. Pero este imaginario se confronta hoy a la realidad ecológica. El coraje necesario para pensar la complejidad es mucho mayor que el que se necesita para tomar las armas. Asumir esa complejidad, ése es el desafío.

Hoy en día, el capitalismo ha cumplido su ciclo, un ciclo casi biológico. Ahora bien, como Marx lo había visto muy claramente, si el capitalismo no encontraba una forma de superación – social, antropológica, histórica - esto lo iba a conducir a su autodestrucción y a la barbarie. Y como a nivel global no existe una forma de sustitución posible, como el socialismo a nivel mundial, como modelo de sustitución global, no existe, efectivamente, es la barbarie. Pero lo que sí existe es la expansión de nuevas formas de militancia, nuevas alternativas que engendran un nuevo paradigma, nuevas formas de lucha, una nueva comprensión del mundo y de la vida.

Los compañeros y las compañeras que están llevando a cabo proyectos y luchas locales, lo hacen la mayoría de las veces en espera del advenimiento de “algo mayor y mejor”. He aquí el error. La complejidad - la articulación entre justicia social y justicia ambiental, los distintos tiempos de las luchas - sólo se puede resolver a nivel local. La idea, la hipótesis, es “actuar local”, porque el “pensar global” solamente existe en lo local. No es que lo “local” es una partecita y yo debo pensar en el “todo” No existe un “todo” que contenga todas las partecitas. Ese “todo” existe solamente en cada parte. El capitalismo, el neoliberalismo, no se encuentran en un único lugar en donde se podría ir a atacarlos. El neoliberalismo existe bajo formas diferentes, en una multiplicidad de lugares. La única manera de combatirlo es, como diría Ernesto Guevara, “crear 2, 3, 300, 300 000 Vietnam”, en el sentido de la multiplicidad de la resistencia. Resistencia y creación.

3.2. Debate y conclusiones

En el debate que tuvo lugar luego de las ponencias, los participantes insistieron sobre lo útil que resultan los intercambios entre los diferentes movimientos, el valor de los ejemplos presentados y la fuerza de los testimonios, así como sobre la importancia de tomar consciencia de que el fundamento de estas diferentes luchas es el mismo en América Latina y en Europa, por lo que un intercambio de experiencias puede ser provechoso para los movimientos de uno y otro lado del Atlántico.

Se destacó la suma importancia, para todos estos movimientos, de la noción de territorio (luchas enraizadas en un



territorio y emprendidas con miras a defenderlo) y de la reivindicación del derecho a la autodeterminación (poder decidir libremente sobre su porvenir y el de su región). También se hizo hincapié sobre el hecho de que estas luchas son además luchas por la recuperación de la ciudadanía.

Por último, se observó que la construcción de alternativas fue otro aspecto central: los movimientos socio-ambientales no sólo llevan luchas «en contra de algo», sino que también luchan «en favor de algo»: otro tipo de producción, de organización, de desarrollo. Y además, es en ese «placer y deseo de construir» y de crear que los movimientos encuentran una de sus principales fuentes de vitalidad. La construcción de alternativas también es considerada como un instrumento de lucha en sí. Por fin, las alternativas elaboradas a nivel local también contribuyen a una reflexión más general sobre los modelos de desarrollo (se hizo referencia, entre otros, al ejemplo de la corriente de pensamiento del decrecimiento económico).

Además, los intercambios propiciaron un debate sobre la búsqueda de coherencia entre los principios que se defienden en materia del medio ambiente y los comportamientos de los que los defienden (1), y sobre cierta incoherencia de fondo, especialmente la que consiste en oponerse a los proyectos de explotación industrial de los recursos naturales sin proponer a cambio ninguna solución global. Los recursos naturales extraídos sirven a fabricar una multitud de objetos y productos que utilizamos cotidianamente y en lo que respecta a numerosas materias primas (como el cobre y otros metales) no existen (aún) soluciones de sustitución (2). Aunque la validez de este razonamiento no ha sido cuestionada, varios participantes insistieron en la necesidad de «no juzgar anticipadamente» en lo que respecta a los comportamientos y de tomar en cuenta los diferentes contextos, y sobre todo, en el hecho de que el carácter indispensable de los recursos naturales de ninguna manera justifica que las poblaciones locales y el medio ambiente sean sacrificados para su extracción.

El no poder contar con soluciones universales no les quita la legitimidad a estas luchas «locales». Muy por el contrario, varios participantes opinaron que es justamente a nivel local que empiezan a forjarse las soluciones a los problemas globales. Es a nivel local - en el territorio donde viven las personas, se construyen las identidades y se implementan alternativas concretas - en donde el tema de la justicia (social y ambiental) adquiere su pleno sentido y se ponen en práctica auténticas experiencias democráticas y ciudadanas.

En lo que se refiere a las formas de lucha, bien sea en Europa o en América Latina, los diferentes ejemplos presentados muestran que los procesos de resistencia reproducen globalmente un mismo esquema, aunque las variantes locales, forzosamente diferentes de una región a otra, se hacen en adecuación con la realidad del habitat y de la cultura de cada población.

Se destacan las siguientes etapas principales: la obtención y la recopilación de información con el fin de evaluar las consecuencias de un proyecto y/o de una política sobre el medio ambiente y el estilo de vida de las poblaciones locales; la organización de un movimiento que reúne a una parte de la sociedad civil y, según el caso, a autoridades locales; la sensibilización del público en general por medio de campañas de información; eventualmente, la reclamación ante representantes del poder público, del gobierno y/o de las instancias internacionales; los procedimientos judiciales; las acciones de resistencia de gran alcance mediático, especialmente, las acciones «directas» de desobediencia civil, que impiden, físicamente, que el proyecto se lleve a cabo.

Sin embargo, quedó claro que dados los diferentes contextos locales, no existe «una receta única». En cambio, es importante que se den a conocer los diferentes movimientos y las formas locales y específicas de resistencia ya que en ciertos casos también pueden servir de ejemplos a otros movimientos. El intercambio de experiencias concretas (las de resistencia como las de las alternativas), tanto como el intercambio de material y de información son sumamente importantes.



De hecho, la información (para plantear problemas y poner en práctica estrategias de resistencia, sensibilizar y comunicar) es crucial para el éxito de las luchas de estos movimientos.

Pero en la práctica, ¿cómo organizar este intercambio de informaciones?, ¿cómo ejemplificar casos concretos y testimonios? Los encuentros como el FSM hacen posible estos intercambios. A parte de estos eventos y para concientizar al público en general, los diferentes ejemplos y testimonios se pueden dar a conocer en diferentes sitios de la red (entre otros, el sitio www.aldeah.org, que fue creado con ese objetivo), a través de las acciones de educación ciudadana y popular (<http://recit.net>) y también, gracias al trabajo de sensibilización e información llevado a cabo por organizaciones de solidaridad internacional (tales como *Francia América Latina*). ¡Todos podemos contribuir!